



Juan Gabriel Valencia

La plaza no se vende, la plaza se defiende

Es un hecho. El gobierno del presidente Calderón no ha conseguido alinear y coordinar las prioridades entre los diferentes actores políticos responsables (o irresponsables, según el caso). Una vez más, el tema de la seguridad.

En las dos últimas semanas se han producido *narcomarchas* en protesta por la presencia del Ejército en diversas localidades del país. Han bloqueado puentes internacionales y vialidades, así como han realizado plantones en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz; el más reciente, Guerrero. En algunos casos, concretamente Monterrey, ha habido algunos detenidos que, a excepción de uno de ellos capturado con armas de uso exclusivo del Ejército, salieron bajo fianza por faltas administrativas.

Estamos ante una serie de despropósitos. De acuerdo con información periodística, las autoridades locales contaron con indicios suficientes de que el crimen organizado pagaba a los manifestantes con dinero en efectivo y diversos materiales de uso doméstico, incluidos útiles escolares. Es evidente la provocación a las fuerzas federales, sobre todo al Ejército; sería inaceptable que cayera en ella el gobierno federal. Sin embargo, también es inaceptable que con el pretexto mustio y pusilánime del derecho de la gente a expresarse y a manifestarse, las autoridades locales —estatal y municipales— se abstengan de actuar.

Si efectivamente hay indicios suficientes del financiamiento y acarreo de esas personas por parte del narcotráfico, no es muy difícil que la situación que hemos presenciado en los últimos días tipifique en flagrancia delincuencia organizada, al menos en grado de complicidad.

El gobierno federal está solo en este empeño. Así como los gobernadores y presidentes

municipales prohicieron el establecimiento y crecimiento de las redes del narcotráfico bajo el argumento de que no era un delito de competencia estatal, ahora, en esa misma lógica, pretenden escudarse en el ejercicio de las garantías individuales de los *narcos* y sus seguidores. Si la mayoría de los gobernadores del PRI no le han entrado a la persecución del crimen organizado porque es la "guerra para legitimarse" emprendida por su opositor panista, esta vez fueron muy lejos al permitir que en forma im-

pune el narcotráfico confronte en la calle, en uso de sus "garantías individuales", a las fuerzas armadas del país. La conducta omisa y cómplice de los ejecutivos estatales ameritaría, por lo menos, unas llamadas telefónicas del secretario de Gobernación y del secretario de la Defensa. Y no necesariamente para saludarlos.

Hay que reconocer, no obstante, que el fenómeno de omisión no sólo abarca a la mayoría timorata de los gobernadores del PRI. La inacción no es privativa de los priistas; Monterrey tiene un alcalde panista y policía a su cargo; las zonas de Guerrero donde se han manifestado están gobernadas por el PRD. Cobardía de todos y tiempos electorales.

Si los ejecutivos locales no han entendido la dimensión del problema, tampoco otros organismos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un desplegado en relación con estos hechos el jueves pasado, por cierto Día del Ejército, en el que "alerta sobre el riesgo agravado de que por motivos circunstanciales puedan verse afectados derechos fundamentales de las personas, como los de libre manifestación y libre tránsito". Exhorta a que los ciudadanos acudan a la CNDH a plantear sus quejas cuando "se sientan agraviados por estas operaciones" (las de la fuerza pública). El elogio de la impunidad.

Continúa en siguiente hoja



Fecha 21.02.2009	Sección Opinión	Página 16
----------------------------	---------------------------	---------------------

Un ciudadano con una *narcomanta* es un delincuente. Veinte ciudadanos que hacen juntos lo mismo son "base social" y están en el pleno ejercicio de sus derechos. Lo social como adjetivo y patente de corso. El paso siguiente es que los cárteles dejen de llamarse así y se autodenominen organismos no gubernamentales.

El presidente Calderón no ha logrado el respaldo activo de la clase política en su enfrentamiento con la delincuencia organizada, respaldo que sí tiene de la población. Hay muchas formas de apretarla. Para eso están las participaciones federales, los fondos de seguridad pública, los servicios de inteligencia locales, la presencia del Ejército y de la PFP. Perseguir a los *narcomarchistas* no es opcional; es una obligación de la autoridad local, a menos que la pobreza se establezca como excluyente de responsabilidad penal. El espectáculo de impotencia del Estado como ente articulado y articulador es deleznable. Alguien tiene que poner orden. Así sea únicamente en este tema. Un tema. ■■

juangabriel_valencia@yahoo.com.mx



Un ciudadano con una *narcomanta* es un delincuente. Veinte ciudadanos que hacen juntos lo mismo son base social y están en el pleno ejercicio de sus derechos. Lo social como adjetivo y patente de corso